



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dos (02) de agosto de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTE:	FLOR ANGELA CASTAÑO ALZATE
DEMANDADAS:	COLPENSIONES, JUNTA REGIONAL Y NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.
TIPO DE PROCESO:	ORDINARIO LABORAL.
PROVIDENCIA:	AUTO-REVOCA.

En la fecha, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, se reunió para resolver la apelación presentada por Colpensiones, en el Proceso Ordinario Laboral adelantado por la Señora **FLOR ANGELA CASTAÑO ALZATE** en contra de **COLPENSIONES**, y de las **JUNTAS REGIONAL Y NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ**, frente a la decisión adoptada por el Juzgado de Instancia, mediante el cual se negó la Excepción previa de Falta de Agotamiento de la reclamación Administrativa.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN ESTA INSTANCIA:

PARTE DEMANDANTE: Dice que tratándose de la reclamación administrativa, basta con que se efectúe conforme al artículo 6 del C.PT. y S.S, esto es, con “...*el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta.*”; lo que quiere decir que Colpensiones pretende que se alleguen requisitos que no tienen sustento legal, como lo es en este caso, una denominación específica a un documento, más allá de que el reclamo contenga el derecho que se pretende. Y que al realizar ésta todos los trámites que tiene establecido COLPENSIONES para la calificación de pérdida de capacidad laboral, con los diagnósticos respectivos, se entiende agotado ese trámite Administrativo.

COLPENSIONES: Que dentro del término oportuno, interpuso la excepción previa falta de agotamiento de la reclamación administrativa frente a las pretensiones de colpensiones, pues ni dentro del escrito de demanda, ni mucho menos dentro del expediente administrativo se encontró reclamación administrativa por las pretensiones de nulidad de dictámenes, y consecuentemente la pensión de invalidez.

La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por la Ponente, el cual se traduce en la siguiente decisión:

AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA
ANTECEDENTES:

La actora presentó Demanda Ordinaria Laboral el 14/08/2020 en contra de **COLPENSIONES** y de las **JUNTAS REGIONAL Y NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ**, pretendiendo se declare la nulidad de cada uno de los dictámenes emitidos por estas, se realice una nueva calificación de PCL mediante prueba pericial, y consecuentemente, se le reconozca y pague pensión de Invalidez a cargo de Colpensiones (anexo 03).

2

Colpensiones dio contestación a la demanda (anexo 14), presentando como Excepción Previa, la Falta de Agotamiento de la Reclamación Administrativa, expresando que no basta con radicar una solicitud para dar apertura a un trámite administrativo, sino que con dicha solicitud debe aportarse las pruebas que acrediten el derecho pretendido, lo que en el presente caso no ocurrió, pues no existe prueba de que se hubiere agotado dicho requisito respecto de las pretensiones de la demanda.

El Juzgado de conocimiento en Audiencia celebrada el 05/05/2022 (anexo 21) declaró infundada la Excepción de Falta de Agotamiento de la Reclamación Administrativa frente a las pretensiones, propuesta por Colpensiones.

Dijo que la misma se entiende agotada con la reclamación del reconocimiento pensional realizada el 18/11/2016, que si bien no fue aportada por la demandante y tampoco se encuentra en el expediente, sí obra respuesta emitida por Colpensiones en la cual le informa a la demandante mediante comunicado del mismo día, mes y año, que debe aportar una serie de documentos para poder realizar el trámite solicitado, lo cual reposa en el documento GEN-RES-CO-2016_13443965-20161118112856. Que de igual forma, la actora realizó otra solicitud en igual sentido el 23/03/2017, que tampoco reposa en el expediente, pero que la entidad le dio igual respuesta, es decir, le solicitó aportar los documentos necesarios para llevar a cabo la calificación de PCL. Y que Colpensiones el 21/06/2017 practicó a la demandante dictamen otorgándole un porcentaje de PCL del 13.43%.

Inconforme con esa decisión, **Colpensiones interpuso Recurso de Apelación**, manifestando que en el Proceso nunca se agotó la reclamación administrativa tendiente a las pretensiones objeto de la demanda, esto es, la nulidad de los dictámenes y la pensión de invalidez; que las solicitudes anteriores a la presentación de la demanda, fueron tendientes a realizar una calificación de PCL, por lo que no cumplen con las exigencias del artículo 6 del C.P.T. y S.S, tendientes a que la entidad examine el caso particular y sus propias actuaciones, previo a un Proceso judicial.

El Juzgado de origen mediante Auto del 05/05/2022 procedió a conceder el recurso de apelación.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

- Competencia: Principio Consonancia art. 66A del C.P.T. y S.S, adicionado, art 35 de la L. 712 de 2001.
- Objeto: Determinar si en el caso a estudio, hizo bien o no el A-quo en Declarar no probada la Excepción previa de Falta de Agotamiento de la reclamación Administrativa propuesta por Colpensiones. Veamos:

El artículo 6 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 4 de la Ley 712 de 2001, establece que cuando se pretendan adelantar acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública, debe agotarse la reclamación escrita de los derechos pretendidos, requisito que una vez cumplido, habilita la posibilidad de acudir a la Jurisdicción, lo que en palabras de la Corte Constitucional en la SC-792 de 2006, constituye un “presupuesto de procedibilidad de la acción.”

Al respecto, La CSJ SCL en S37251 del 07 de febrero de 2012, M.P LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS expresó:

“El artículo 6º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, con la modificación introducida por el artículo 4º de la Ley 712 de 2001, señala como requisito de procedibilidad para las acciones contenciosas contra La Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública, la previa reclamación administrativa consistente en el simple reclamo escrito del pretendiente sobre el derecho, la cual se entiende agotada cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no haya sido resuelta”.

En el caso de autos se debate si la demandante cumplió con la carga de reclamar administrativamente el derecho pretendido en sede judicial, lo que resulta necesario para asumir competencia, por cuanto la Parte pasiva del Proceso también la integra una entidad de la administración pública.

En aras de resolver la controversia, debe verificarse cuál es la finalidad de la disposición contenida en el artículo 6 del CPT y SS, prevista por el legislador con un ánimo de eficiencia, autocontrol y economía, lo que se explica en el hecho de permitirle a quien eventualmente será demandado, que en sede propia tome una decisión evitando un conflicto futuro y sus costos en lo social y en lo económico.

La teleología de la institución de la reclamación administrativa, fue bien explicada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia 12221 del 13 de octubre de 1999, en la que indicó:

“Tiene por finalidad el anterior procedimiento gubernativo que las entidades de derecho público y social **con antelación** a cualquier controversia ante los juzgados laborales, tengan la oportunidad de establecer, previo el estudio fáctico y jurídico que sea del caso, la procedencia o no del derecho que se pretende por el peticionario, y que de ajustarse a la ley la respectiva reclamación, **la misma sea reconocida directamente por el ente obligado, logrando así, sin la intervención del Juez Laboral, la solución de un conflicto en cierne**”.

Criterio reiterado en la SL1867 del 29 de mayo 2018, Rad. 51177, M.P Cecilia Margarita Durán al indicar:

“Significa lo anterior que mientras no se haya agotado dicho trámite, el juez del trabajo no adquiere competencia para conocer del asunto. **La importancia de realizar la reclamación administrativa con anterioridad a iniciar la acción contenciosa radica en la posibilidad que la Ley le otorga a la administración pública de revisar sus propias actuaciones antes de que estas sean sometidas al conocimiento de la Jurisdicción Ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social**, de modo que la falta de esta reclamación con anterioridad a la instauración de la demanda es insubsanable. “

De acuerdo con lo expuesto, la reclamación administrativa constituye un factor de competencia, y por ello resulta indispensable que se acredite en el Proceso la presentación previa de un escrito en el que se haya expresado ante la entidad de derecho

público, la petición del derecho que se pretende, a fin de que esta última tenga la oportunidad de realizar el estudio fáctico y jurídico del caso, y así poder establecer la procedencia o no de tal derecho, y que de ajustarse a la ley, pueda éste ser reconocido directamente por el ente público obligado a ello, sin la intervención del Juez Laboral, evitándose así los costos que implicaría un Proceso Laboral.

En el caso a estudio, observa la Sala que en efecto la Parte demandante en múltiples ocasiones solicitó a Colpensiones, la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, la calificación de pérdida de capacidad laboral, el pago de honorarios para continuar con el recurso de apelación ante la JRCI, la solicitud de traslado y retracto de BEPS, documentos que yacen en el anexo 15 del expediente administrativo; pero brilla por su ausencia reclamación ante Colpensiones en la cual se pretenda ora la nulidad del dictamen ora la pensión de Invalidez a cargo de Colpensiones, por lo que en este Proceso no se puede inferir como agotado el requisito de reclamación administrativa, y bajo este estado de cosas, la entidad no podrá ejercer la facultad de satisfacerlo voluntariamente, generándose con ello la falta de competencia para el Juez de Conocimiento.

Y es que contrario a lo argumentado por la A quo, considera la Sala que la reclamación no se puede entender agotada con los documentos suscritos por Colpensiones el 18/11/2016 y el 23/03/2017, ya que de ellos no se puede inferir una petición expresa o tácita de la pensión de invalidez que se pretende en este Proceso, pues del tenor literal de dichas respuestas se puede advertir cómo Colpensiones manifestó *“tipo de trámite: calificación de pérdida de capacidad laboral en primera instancia” ... “en respuesta a su solicitud nos permitimos informar que para continuar su trámite usted deberá presentarse en la sede..., ...y llevar la documentación abajo mencionada”*; y el hecho de que se lleve a cabo el Proceso de calificación de PCL, no lleva implícito por sí solo que la entidad niegue o no el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

Por todo lo expuesto, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente **REVOCAR** el Auto de fecha 05/05/2022 (anexo 21), mediante el cual el Juzgado de Instancia negó la Excepción Previa de Falta de Agotamiento de la Reclamación Administrativa; para en su lugar, declarar probada dicha Excepción.

SIN COSTAS PROCESALES de 2da Instancia, al prosperar el recurso de apelación interpuesto por la Parte demandada.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

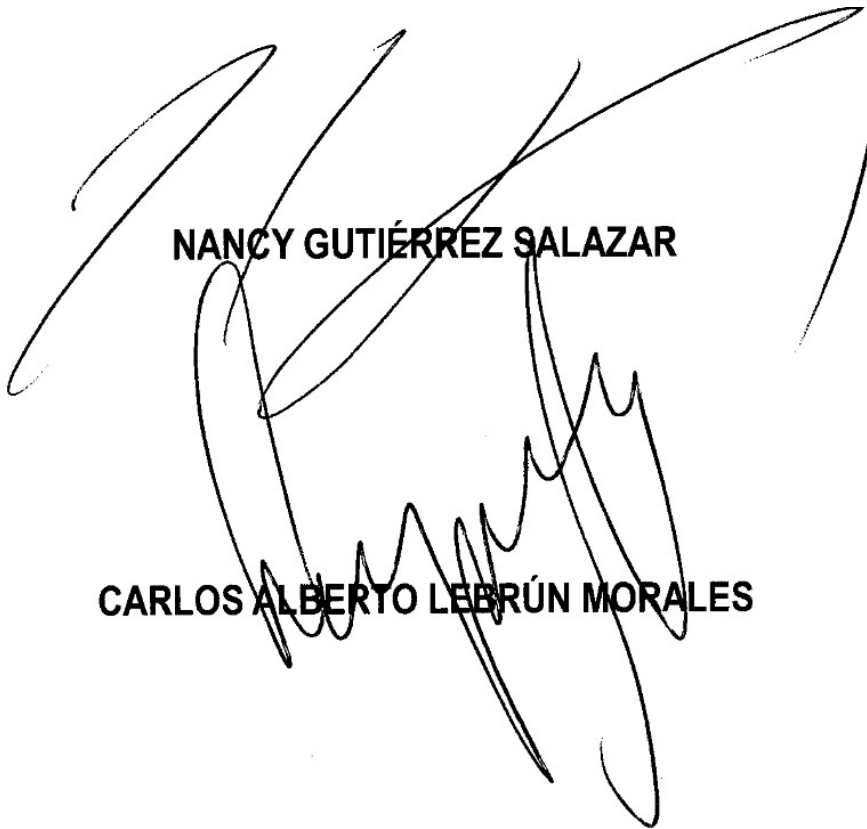
PRIMERO: REVOCAR el Auto proferido por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín el 05 de mayo de 2022, dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido por la Señora **FLOR ANGELA CASTAÑO ALZATE** en contra de **COLPENSIONES**, de la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN INVALIDEZ Y DE LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ**, en cuanto Declaró no probada la Excepción Previa de Falta de Agotamiento de la reclamación Administrativa; para en su lugar, declararla probada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Sin COSTAS PROCESALES de 2da Instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes por **Estados** virtuales, artículo 295 C.G. del P. en concordancia con la Ley 2213 de 202; y se firma por quienes en ella intervinieron.

5

Los Magistrados,



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

**EN AUSENCIA JUSTIFICADA
MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR**
Que la presente providencia se notificó por
estados N° 135 de agosto 03 de 2022.
consultable aquí:
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>